

Arauca: un territorio de contrastes*

Por Omar Jaime Gutiérrez Lemus**

* Artículo recibido en febrero de 2009.

Artículo aprobado en abril de 2009.

** Sociólogo, investigador del Cinep.

Introducción

El contenido de este artículo hace parte de una investigación más amplia, realizada por el autor para Odecofi. Dicha investigación cubre 208 municipios del territorio total o parcial de nueve departamentos del Nororiente y Oriente de Colombia¹. A su vez estos municipios están agrupados en 25 subregiones que constituyen *espacios de representación*², de los cuales solo se referencian aquí cinco (Caño Limón, Altillanura y Llanos Bajos, Sarare, Cusiana-Cupiagua, Prellano y Vertiente Andina) que de una u otra manera están incluidas en lo que se conoce como el territorio o la historia del departamento de Arauca.

La misma investigación cubre una serie de hechos (violencia y conflicto armado) ocurridos durante 20 años (1988-2008); a los cuales se les hace distinto tratamiento dependiendo de la dimensión de análisis y los requerimientos de sistematización de los mismos (histórico o coyuntural). Un hecho que parece

¹ Norte de Santander, Cesar, Santander, Boyacá, Arauca, Casanare, Vichada, Meta y Cundinamarca.

² Estos espacios de representación o vividos, tienen particular importancia en la historia política y social de un país como Colombia, en especial a aquellos territorios que han conocido largos periodos de violencia y se pueden caracterizar como inherentes al: “lado clandestino de la vida social, [están] llenos de política e ideología [y] descansan en las prácticas materiales que concretan las relaciones sociales de producción, explotación y sometimiento. [Hacen] énfasis en los espacios dominados, en los espacios de las periferias, en los márgenes y en los marginados, en los espacios de la oposición radical y de la lucha social, en los espacios de la diferencia y de la diferenciación” (Soja, 1996, citado por Delgado, 2001, 52 -54).

importante en un periodo de tiempo corto (uno o dos años) puede relativizarse y perder peso en una perspectiva más amplia (20 o 30 años). La definición de “histórico” o clave en la interpretación de eventos posteriores o pasados no deja de ser problemática (Carr, 1983). Es también un asunto de metodología de investigación que inquieta cotidianamente a quien emprende una tarea como la que se comenta (20 años para 208 municipios). Por estas razones se presenta a continuación un análisis sucinto (1965-1992) y una cronología de hechos (2002-2009) referidos al territorio de Arauca con lo cual se pretende ofrecer un contraste que ilustra el devenir de su historia y sociedad.

El mayor énfasis está dado a la coyuntura (2002-2009) por cuanto es considerable la serie de hechos de violencia política y conflicto armado en un periodo que supone es de consolidación de una política pública (Seguridad Democrática); reclamada con urgencia desde algunos sectores sociales, y controvertida con vehemencia desde otros³. Por el mismo énfasis es palpable el acento valorativo de los actores que se relacionan y se enfrentan (en competencia o lucha)⁴. La perspectiva histórica, por su parte, sirve de contexto al análisis de coyuntura al resaltar ciertas peculiaridades que intervienen sin cesar en el presente⁵. Esta argumentación ilustra doblemente tanto un pasado de contraste y un presente incierto para Arauca como un interés teórico (generar conocimiento) y otro público (proponer perspectivas de desarrollo y paz) para el proyecto Odecofi. Al mismo tiempo una conclusión salta a la vista: las enormes limitaciones del estado central para afianzar su poder dentro de márgenes propios del derecho y la democracia (Schmitt, 1972 y Habermas, 1986)⁶.

³ No se hace, sin embargo, una evaluación de dicha política, tan solo se exponen algunos ángulos de la perspectiva de *sentido subjetivo* (acción social, según Weber) de los actores mencionados.

⁴ Las fuentes básicas de este énfasis son la observación directa y las entrevistas selectivas. Se resalta aquí el valor del trabajo empírico en la labor investigativa.

⁵ Las fuentes básicas de esta perspectiva son los estudios históricos y la interpretación de información de prensa y estadísticas. Se acude y analiza aquí una información de distinto alcance teórico y documental.

⁶ En la investigación en mención se toman como referencia teórica algunos estudios de Charles Tilly, Carl Schmitt, y Jürgen Habermas sobre las transformaciones del estado en occidente (centralización y pacificación)

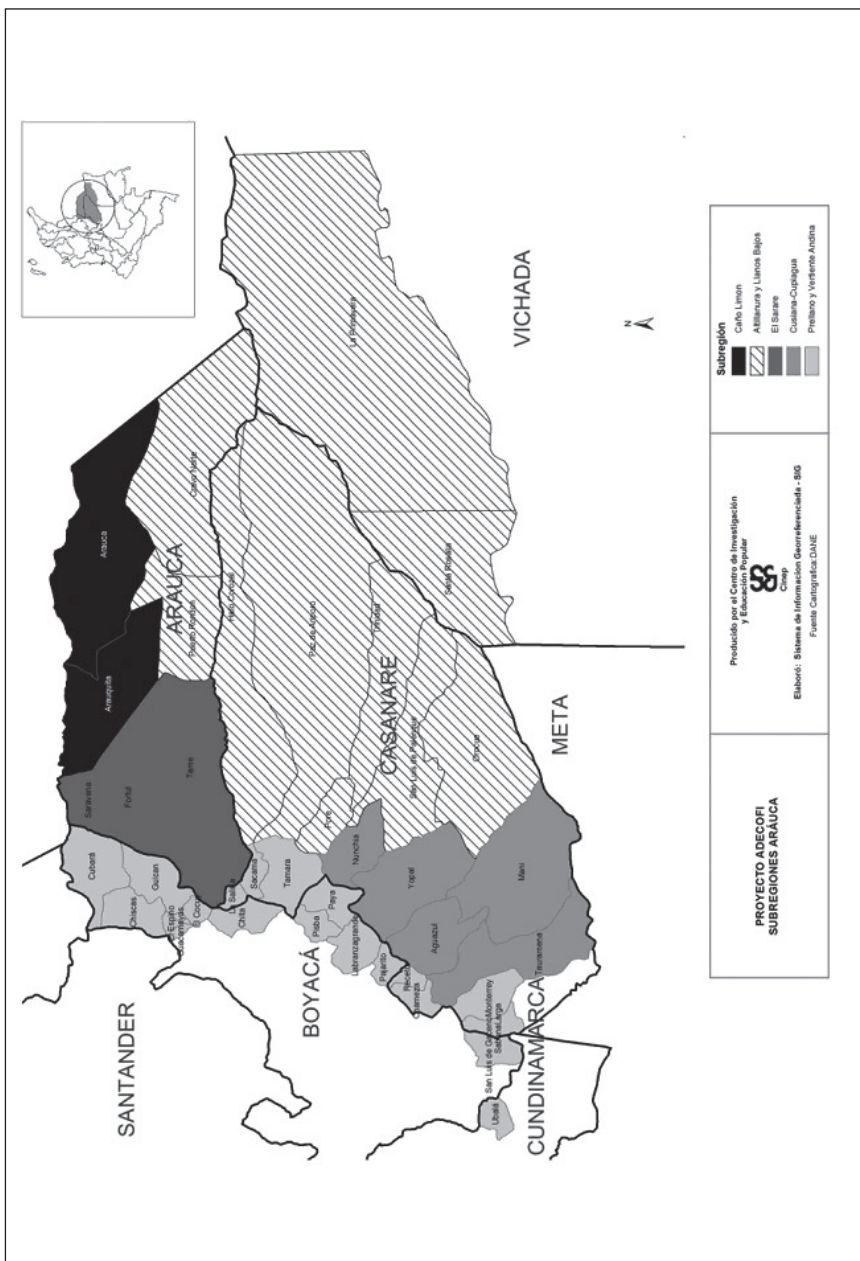
Aspectos generales

Sin duda Arauca es un territorio que se presta para múltiples interpretaciones; su geografía, su historia, su poblamiento, su economía, contrastan con otros territorios limítrofes y también en su interior son perceptibles las diferencias. El piedemonte, la vertiente y los llanos bajos son paisajes naturales que advierten también sobre las características de sus pobladores: la ribereña población de Arauca está ligada a la vida del otro lado del río, a poblaciones como El Amparo y Elorza o Nula en Venezuela, que manifiestan así una cultura de frontera; Tame hace parte de la historia e idiosincrasia de Casanare (Sácama, Pore) y Boyacá (Sogamoso, El Cucuy, Pisba), más ligada al orden y respetuosa de la autoridad; Saravena y Fortul son fundaciones recientes cuyo pasado evoca la colonización santandereana (Labateca, Toledo, Cúcuta) de los años sesenta y setenta; Puerto Rondón y Cravo Norte están ligados a la historia colonial de Orocué, Hato Corozal y Paz de Ariporo en Casanare y a la navegación por el río Meta o a la colonización, más reciente, de Primavera y Santa Rosalía en Vichada. Visto de esta forma, el departamento de Arauca se antoja una unidad político-administrativa un tanto dispersa, donde su capital, en apariencia, no cumple muchas funciones de polarización económica y espacial; tampoco social o cultural. Un archipiélago de microregiones como lo ilustra el mapa 1.

El paisaje de las distintas economías parece también guardar alguna relación con su geografía y poblamiento: sobre el piedemonte (Tame, Fortul y Saravena) podemos detectar la presencia de unidades productivas campesinas y ganaderas de regular extensión; sobre las riberas del río Arauca la explotación petrolera (Cano Limón), la agroindustria y el comercio se imponen sobre la pequeña producción agropecuaria; en los Llanos bajos (Puerto Rondón y Cravo Norte) predominan las haciendas y los hatos ganaderos⁷. Sobre esta división económica y espacial se ha sobrepuesto la producción de coca y el

⁷ Esta descripción concuerda con la subregionalización propuesta, ver mapa 1.

Mapa 1 Subregiones Arauca



contrabando, más visibles con el conflicto armado y la violencia política, recrudescidos desde 1999.

Por momentos, la vida política también parece repujar estas diferencias: el efímero auge de la Anapo en los años setenta en las zonas de colonización del Sarare; la reclusión de la vida bipartidista (liberal y conservadora) en Arauca, la capital, y en Tame, otro antiguo municipio; el predominio de la Unión Patriótica en Saravena y en Fortul, durante la década de 1980; la influencia “invisible” de las Farc y el ELN sobre los partidos tradicionales y en los gobiernos locales en la década de 1990; la polarización entre partidos de la coalición Uribista y el Polo Democrático en los principales municipios durante en los primeros años de esta década, etc. Por último la puja entre el estado y la subversión o entre ésta y los grupos paramilitares también evidencian algunas de estas diferencias geográficas, poblacionales, históricas y económicas; para citar apenas tres ejemplos: no por casualidad el ELN tomará tanta fuerza en las zonas de colonización del Sarare en los setenta; tampoco es producto del azar que Tame se erija como el punto de entrada y expansión del paramilitarismo en el Departamento desde 1999; menos asemeja improvisación que la presencia del estado se haya concentrado sobre el piedemonte o sobre las riberas del Arauca desde la década de 1980.

La investigación en curso intenta dibujar un cuadro de relaciones entre los puntos mencionados: lo geográfico y espacial; el poblamiento y lo social; lo político y el conflicto; lo económico y lo institucional; lo ilegal y la violencia; o cualquier otra serie de asociaciones igualmente válidas y diferenciadas entre los mismos tópicos. Todo esto para sustentar una idea básica: tanto la violencia política como el conflicto armado, observados en este territorio desde hace por lo menos veinte años, mantienen una existencia objetiva, parcialmente ligada a la intencionalidad consciente de sus protagonistas.

En efecto, se ha discutido mucho sobre el carácter de *actores colectivos* de los grupos armados irregulares y de las *causas objetivas* de la violencia en Colombia, en variadas aproximaciones que a veces se confunden con los intereses

ideológicos de los proponentes (Rubio, 1998; Montenegro y Posada, 2001; y Deas y Gaitán, 1995). En esta investigación se advierte que dichos grupos se han instalado en las fisuras visibles de los conflictos sociales y han tomado de ellos justificaciones para construir distintos discursos que buscan legitimar sus actuaciones frente a la población civil. El caso de Arauca muestra bien que la mera voluntad de las guerrillas o los paramilitares para proseguir la guerra o las disputas por el acceso a los recursos naturales o a los presupuestos públicos (regalías) no explican a satisfacción la persistencia del conflicto y la violencia⁸.

Un marco histórico

Hasta mediados de los años ochenta el departamento de Arauca fue un territorio de colonización, en el ámbito interno, y de frontera en el contexto binacional⁹, donde las instituciones del estado central cumplían funciones apenas mínimas de integración de la población (seguridad) y de ejercicio de la soberanía frente a los países limítrofes (Venezuela y Brasil); sin embargo, el descubrimiento y posterior exploración de los yacimientos petrolíferos de Caño Limón marcaron un cambio significativo en esta percepción de marginalidad económica y social. En adelante el Departamento tomó forma como un escenario clave en una visión geopolítica de las relaciones centro-periferia y dentro del espectro de conflictos y violencias que acompañaron su proceso de configuración espacial. En estas transformaciones cumplieron un papel clave tanto el estado como la sociedad que se organizó en Arauca.

⁸ En este sentido lo que se propone aquí se aleja de interpretaciones como las hechas por Kaldor (2001) o Münkler (2005) y, por el contrario, se acerca a la visión elaborada por Tilly (2007) sobre la violencia colectiva.

⁹ La extensión total de Arauca está calculada en 23.818 km² y en la actualidad está dividido en siete municipios: Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte.

El poblamiento

Dadas las características naturales (suelos llanos y poco fértiles e inundables)¹⁰ y las particularidades del poblamiento (escaso y centrado en el piedemonte¹¹ o en la frontera), Arauca se identificó durante largos años como un territorio de economía campesina y ganadera (hatos) poco integrada a los mercados nacionales y donde las relaciones de parentesco y vecindad con algunas poblaciones venezolanas marcaban una pauta histórica determinante. La colonización campesina del Sarare, impulsada por el Gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970), cambió en algo esta realidad al impulsar la ocupación productiva de las tierras más fértiles y al instalar alguna infraestructura pública (Incora, Caja Agraria), con sus respectivas burocracias, como representación y esfuerzo de regulación del estado central.

En este contexto y precedido de la crisis del proceso de colonización durante los setenta¹², se generaron algunas condiciones que hicieron posible el crecimiento y la posterior consolidación de las guerrillas del ELN y las Farc. Durante la década siguiente (1980), asociado al inicio de la explotación petrolera, los frentes Domingo Laín del ELN y Guadalupe Salcedo de las Farc dieron apertura a cierto “modelo” de captura de rentas y exacciones en sus zonas de influencia¹³, las cuales llegaron virtualmente, años después, a cooptar, subordinar o someter las estructuras de los poderes locales, incluyendo los niveles

¹⁰ Con todo, la existencia de bosques de galería a lo largo de los ríos ha favorecido la formación de suelos más fértiles y aptos para la producción agrícola; este fenómeno matiza la situación de menor fertilidad de la altillanura y las sabanas inundables.

¹¹ De hecho el corredor de poblamiento más destacado de toda la Orinoquia es el piedemonte, que se extiende desde Arauca, en la frontera con Venezuela, hasta Uribe, Meta, en inmediaciones de la Serranía de La Macarena.

¹² Durante los setenta del siglo pasado, el país fue sacudido por una serie de protestas y movimientos sociales campesinos, especialmente a lo largo del piedemonte llanero y amazónico, que pusieron en evidencia la crisis del modelo colonizador en esas zonas y la ausencia de una verdadera política pública de reformas agrarias en el territorio y en el país en general (González, 1989).

¹³ El 19 de abril de 1984, se produce el primer atentado dinamitero contra el pozo La Yuca, atentado que “inauguró” un sistema continuado de exacciones a las compañías petroleras.

de representación nacional (Cámara y Senado). Al mismo tiempo, estas organizaciones proyectos de poder político y organización social alternos al estado que por momentos se mantuvieron en tensión y generaron enfrentamientos¹⁴. Los años noventa fueron de “hegemonía” para la subversión; sin embargo, éste fue un predominio largamente gestado – a lo largo de veinte años- en los puntos más poblados y vitales de la geografía y la economía de Arauca. Aquí la guerrilla no avanzó de la periferia al centro, más bien co-agenció en la sombra un conflictivo proceso de integración de un territorio y una sociedad al resto de la nación (González, Bolívar y Vásquez, 2003).

La guerrilla

En efecto, contrario a lo que se cree, el proceso de gestación de las guerrillas en Arauca es más antiguo que el descubrimiento del petróleo y puede remontarse al momento mismo de la promoción de la *colonización dirigida* del Gobierno Nacional. De la misma forma, tanto las Farc como el ELN, participaron desde un comienzo en la elección popular de alcaldes (1988) y gobernadores (1992), a través de la Unión Patriótica, primero, y señalando o escogiendo directamente a los candidatos liberales o conservadores, después; el rechazo a las elecciones y los llamados a abstención del ELN fueron un discurso que solo sirvió para distraer a ingenuos editorialistas sobre sus ambiciones de poder. La temprana implantación de la guerrilla, es el resultado de un complejo juego político e institucional en el que participaron algunos funcionarios públicos radicalizados, las organizaciones campesinas, el discurso modernizante del estado en ese momento (reforma agraria) y las débiles estructuras bipartidistas del Departamento.

¹⁴ Hoy en día dichos proyectos pueden parecer precarios en participación ciudadana o libertad individual, pero parecían adaptadas a una trayectoria de colonización y apropiación campesina del espacio. Las diferencia de los proyectos de organización social y poder, explican en buena parte los enfrentamientos suscitados entre el ELN y las Farc, en especial desde 2005.

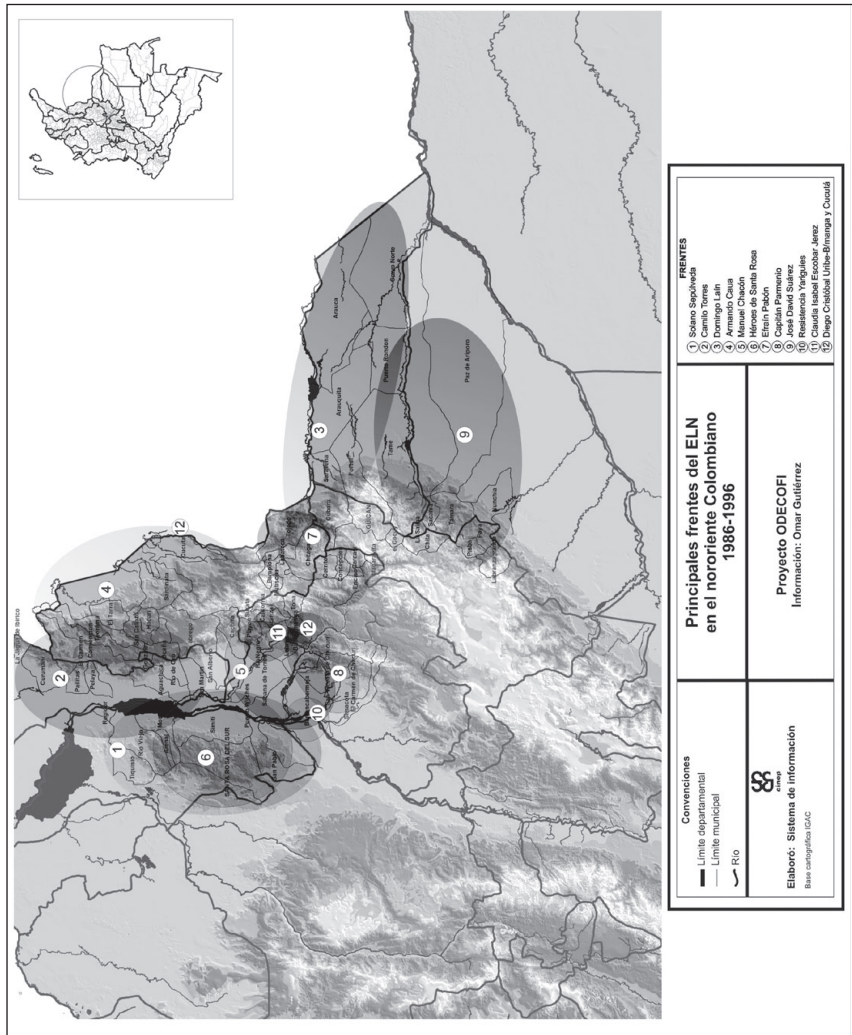
Cabe resaltar esta última circunstancia porque marca una diferencia entre Arauca y otros territorios limítrofes. En efecto, el bipartidismo se concentraba en municipios como Arauca y Tame, los más poblados y antiguos, y su representación no estaba suficientemente anclada en nichos de poder social y económico, de cobertura departamental (grandes propietarios), para “someter” a la masa de colonos que inundó el piedemonte desde la década de 1960. En contraste, la movilización social y los programas de colonización y reforma agraria, promovidos por el gobierno de Lleras Restrepo, favorecieron la organización comunitaria, hasta cierto punto autónoma, de los recién llegados y de esta forma facilitaron el arraigo de la naciente guerrilla que supo acomodar sus objetivos de largo plazo a las reivindicaciones de los colonos frente al estado central. Años después, incluso el Ejército acuñaría el término de “guerrilla social” para designar este fenómeno tan específico de implantación de los proyectos insurgentes en un territorio de colonización.

Con todo, se pueden observar algunas diferencias en las trayectorias espaciales de la subversión (ver mapas 2 y 3). Mientras las Farc llegaron a Arauca a finales de la década de 1970, como producto de la ejecución de algunas directrices nacionales emanadas de su Sexta Conferencia (1978), para fundar, primero, el Frente 10 (1980) y establecerse en las inmediaciones de Fortul y Tunebía, y avanzar más tarde sobre buena parte del territorio con el Frente 45 (1983), el comportamiento del ELN fue un tanto distinto: llegó antes (1965) al Sarare y Arauquita¹⁵ y luego intentó expandirse desde allí a otras subregiones de Norte de Santander (Provincias de García Rovira y Pamplona) y Casanare (Vertiente Andina). Incluso puede constatarse el nivel más alto y variado de actividad política y militar de este último grupo sobre el primero en todo el Nororiente, por lo menos hasta mediados de la década de los noventa.

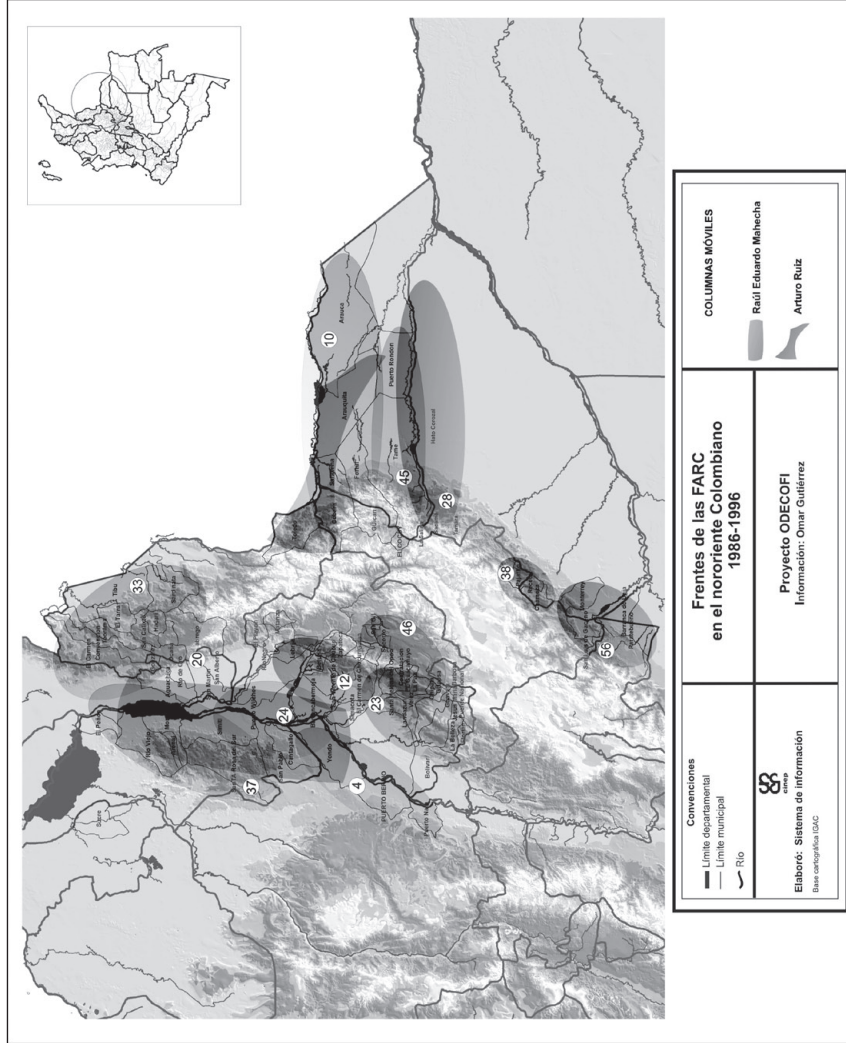
En efecto, el ELN fue de lejos la organización guerrillera más activa de esta parte del país y desde Arauca comenzó un proceso de expansión a territorios

¹⁵ Existe evidencia para sustentar que algunos integrantes del ELN llegaron a Arauca por la misma época en que se fundó y dio a conocer esta organización (1966).

Mapa 2 Frentes del ELN en el Nororiente colombiano 1986-1996



Mapa 3 Frentes de las Farc en el Nororiente colombiano 1986-1996



más integrados al contexto nacional o, también, más periféricos; para esto se crearon nuevos frentes como el Efraín Pabón (Santander, Norte de Santander) y el José David Suárez (Casanare, Boyacá) aparte de algunas compañías (Simacota y Pomares). La suerte de este intento de expansión no fue la mejor. Luego de un claro esfuerzo por constituirse en un poder alterno, entre 1988 y 1995, su accionar encontró una fuerte oposición entre sectores políticos de algunos municipios de Santander y Norte de Santander que apoyaron los planes de las Fuerzas Militares por detener las pretensiones de los “elenos”. Al mismo tiempo los paramilitares de Héctor Buitrago (Autodefensas de Casanare), la “competencia” con los frentes 28 y 38 de las Farc y las operaciones del Ejército detuvieron su avance sobre el piedemonte y la vertiente de Casanare y Boyacá (ver tabla 1 y gráfica 1). Aún así el ELN ha mostrado una sorprendente capacidad de adaptación a los cambios en el conflicto (tecnológicos, territoriales, políticos, sociales) y mantiene una significativa presencia en sus lugares de origen; tanto que, en los últimos años, ha llegado a proponer algunas zonas (Tunebia, Puerto Nariño) como zonas de concentración y negociación binacional con el Gobierno Nacional¹⁶.

El petróleo

Como fuere, el sorpresivo auge del petróleo en los ochenta y los posteriores descubrimientos han cambiado poco la opinión de buena parte de los habitantes sobre la institucionalidad legal y apenas ha matizado el paisaje cultural y social de los municipios. Esto ocurrió en razón de las circunstancias y la naturaleza de las explotaciones petroleras, a cargo de algunas multinacionales, y la forma como el estado central y regional comprendieron su respectivo papel. Así estas compañías privatizaron, en escala reducida y con apreciables limitaciones, algunas funciones públicas (inversión focalizada, provisión de servicios, oferta de empleo e incluso coerción) y señalaron los espacios de mayor presencia para el estado (Arauca, Arauquita y Saravena). Una sociedad

¹⁶ Esta posibilidad se exploró a finales de 2007, bajo el auspicio del Gobierno de Venezuela.

poco diversificada, en la cual los procesos de *acumulación* de capital eran relativamente precarios y un estado interesado en captar las rentas petroleras antes que en brindar *seguridad* a los ciudadanos y ejercer la *soberanía* sobre el territorio fueron las notas predominantes. Como se verá, estas peculiaridades pesan todavía hoy en la vida política y en manejo del “orden público”; también en las percepciones colectivas y locales sobre el significado y funciones del estado¹⁷.

Tabla 1
Acciones unilaterales por grupo Nororiente del país¹⁸
1988 – 2007

Grupo	1988-1991	1992-1996	1997-2001	2002-2005	2006-2007	Totales
ELN	327	480	332	124	64	1327
Estatales	169	227	173	552	416	1537
Farc	102	152	207	239	117	817
Paramilitares	21	30	110	149	147	457
Total Nororiente	619	889	822	1064	744	4138
Total Colombia	1937	3146	4636	6350	5054	21123

Fuente: Cerac

El estado

En efecto, de acuerdo con el municipio que se examine, se tiene la impresión de que el grado de injerencia del estado cambia; ni que decir de su capacidad para regular las relaciones sociales, superar conflictos (centraliza-

¹⁷ Está pendiente una investigación sobre la “etnografía del estado” en las 5 subregiones mencionadas que recalque sus articulaciones con el conflicto armado y la violencia política.

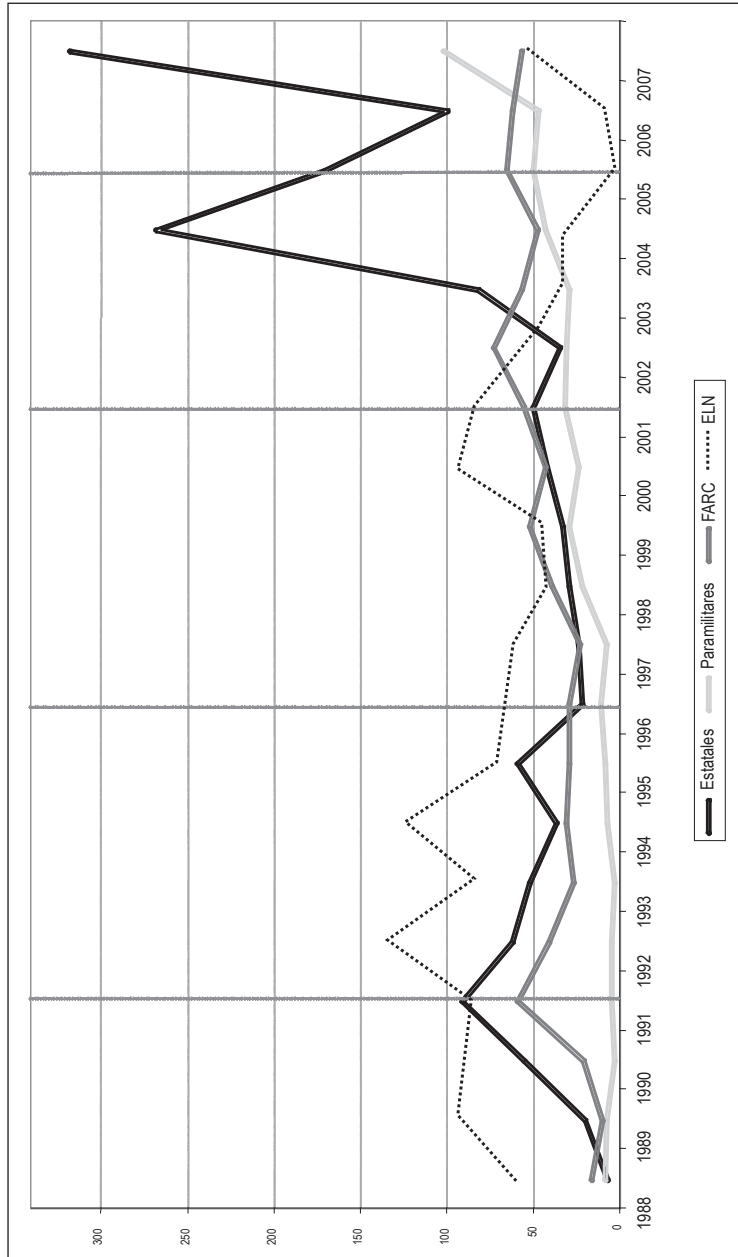
¹⁸ Como se mencionó, cubre los 208 municipios de Nororiente y Oriente, agrupados en 25 subregiones; se excluyen aquellas donde el ELN no hace presencia (Ariari, Duda-Guayabero, Guaviare, etc.). Es decir, se toman 18 de las 25 subregiones originales.

ción) o imponer frente a los alzados en armas (pacificación); esto evidencia una *presencia diferenciada del Estado* (González, Bolívar, Vásquez, 2003 y Tilly, 1992) dentro del mismo Departamento, lo que está asociado, por contraste, a distintas formas de conflicto armado y violencia; éstas son diferencias de grado, pero se admiten igualmente las distinciones de naturaleza. Sin duda, durante muchos años, el control territorial del estado sobre amplias zonas fue parcial o casi inexistente (Cravo Norte, Puerto Rondón); parecía que resultaba “antieconómico” mantener una apreciable presencia burocrática donde las concentraciones de población no eran muy numerosas y los procesos de acumulación de capital eran precarios o estaban en manos de grandes propietarios o de empresas particulares.

En estos casos, para el gobierno central, la solución pudo consistir en otorgar a ciertos individuos, grupos u organizaciones la representación del estado en Arauca. Esta solución convirtió a estos poderes particulares o privados en intermediarios entre el estado central y la población civil (González, 1989). En casos extremos esta intermediación funcionaba para efectos específicos (realización de elecciones, construcción de obras de infraestructura, manejo del “orden público”, explotación de recursos naturales) y entre los habitantes del Departamento se mantenía la percepción de que el estado era un poder lejano (gobierno central) al cual se acudía –cuando la situación lo requiriera– en búsqueda de soluciones a los problemas específicos y concretos.

En consecuencia, hasta finales de los años noventa, las transformaciones introducidas por la economía petrolera se reflejaron, sobre todo, en una mejor integración física del Departamento al resto del país, a través de la construcción o mejoramiento de carreteras (troncal del llano) y otras obras de infraestructura (aeropuerto, escenarios públicos, etc.). También aumentó la población urbana y rural, por migración, y se incrementó la demanda de servicios básicos y bienes de consumo en los principales centros urbanos.

Gráfica 1
Acciones unilaterales por grupos - Nororiente de Colombia, 1988-2007



Fuente: Cerac

El espacio¹⁹

Con el paso del tiempo, en el Departamento se afianzaron dos núcleos de crecimiento demográfico y económico de relativa importancia: Arauca, la capital, en pleno Llano, y Saravena, en el piedemonte, sobre la selva del Sarare. Entre estos municipios se ha dado una suerte de complementariedad y competencia por el liderazgo político y económico dentro del Departamento; sobre las vías que los comunican se teje la vida diaria de la mayor parte de sus habitantes, dado que se concentran las agroindustrias, las actividades agropecuarias, las entidades prestadoras de servicios, los centros educativos, la infraestructura económica y social, la presencia de instituciones del estado, el sistema de seguridad a cargo de la fuerza pública, etc.; no obstante, sobre estos mismos ejes viales y sobre este tejido social, económico y político se implantó también la violencia y el conflicto armado.

Es decir, estos últimos fenómenos penetraron el centro mismo de los intereses vitales del Departamento y de sus habitantes; no han sido asuntos marginales o desdeñables²⁰; por el contrario parecen ocultar y manifestar, al mismo tiempo, el enfrentamiento de grandes intereses endógenos y foráneos o de visiones y aspiraciones colectivas, a veces contradictorias, que escapan al poder del estado local o, incluso, nacional.

Conflicto armado en una perspectiva de coyuntura

Tal vez por lo anterior, las estrategias del estado para recuperar el control del territorio y la población civil han tenido tantas limitaciones; basta recordar dos antecedentes: durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990),

¹⁹ Se toma aquí la acepción de la palabra territorio como “inmutable en sus límites, una línea trazada por mutuo acuerdo o por la fuerza. (un) territorio (así) no tiene forzosamente la misma extensión a través de la historia. Pero en un momento dado representa un dato fijo. Se llama espacio una vez que se enfrenta a la sucesión histórica de las situaciones de ocupación efectiva por un pueblo” (Santos, 1990, 206).

²⁰ En otros Departamentos de la Orinoquia (Meta, Casanare) el conflicto armado se consideró un asunto marginal, por lo menos hasta 1996.

sobre Arauca, se concentraron buena parte de las operaciones de contrainsurgencia; éstas fueron seguidas, desde el extremo ilegal (acciones de los primeros grupos paramilitares), con la llamada “guerra sucia” que afectó particularmente a la Unión Patriótica y a sectores del Nuevo Liberalismo. En aquella época la subversión había lanzado un reto al estado que se materializaba, en una proporción significativa, a todo lo largo y ancho del Nororiente (incluido Arauca). Tiempo después se desarrolló sobre el mismo territorio parte sustancial de la “Estrategia Nacional Contra la Violencia”, puesta en marcha por el presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994) al fracasar el proceso de diálogo con los insurgentes en México y Venezuela; esto sucede al tiempo que se promulga la Constitución de 1991 y las dos principales guerrillas (ELN y Farc) quedan al margen de una inclusión institucional. Con todo, entre 1992 y 1996, estos mismos grupos armados desarrollan una fuerte labor de despliegue territorial y social (producto de las definiciones en sus congresos y conferencias) que los llevará a constituirse en poderes paralelos al estado, con especial importancia, en Arauca. La penetración de los grupos paramilitares (1999) poco cambió esta situación hasta 2002, año en que el estado toma la iniciativa en el conflicto.

La población civil

En efecto, desde 2002 Arauca vive una situación particular de conflicto armado que guarda alguna relación con la declaratoria de “zona de rehabilitación y consolidación”(ver gráficas 1 y 2); antes de marzo de ese año, como se mencionó, era un territorio donde los grupos guerrilleros habían alcanzado un nivel significativo de consolidación de un proyecto de poder (territorial, político y financiero) que, como corolario, mostraba cierta subordinación de la clase política, representada por los partidos Liberal y Conservador y las ejecuciones de sucesivas administraciones públicas locales y departamentales (Peñate, 1999)²¹. La estrategia de seguridad de Uribe intentó hacer un corte

²¹ Como lo muestra la información elaborada por Cerac, antes del periodo 2002-2005, los niveles de enfrentamiento entre guerrillas y el estado en la zona del Sarare y en la frontera sobre el río Arauca, fueron significativos, si se les compara en un contexto regional (Orinoquia) y nacional; así, por ejemplo, en los alrededores de Saravena y Arauca ocurrieron entre 1997 y 2001, alrededor de 172 “eventos de conflicto”, frente a 290 en el periodo 2002-2005, la mayor parte de ellos por iniciativa de la guerrilla.

drástico de esta situación y adoptó medidas que a la postre resultarían controvertidas por analistas, políticos y la propia Corte Constitucional²². Algunas de estas medidas contemplaron las capturas masivas, la intervención de la regalías petroleras por el poder central, el nombramiento provisional de un ex-militar como Gobernador, el establecimiento de un complejo sistema de protección a la infraestructura petrolera y el aumento ostensiblemente de efectivos de la fuerza pública en el territorio²³.

Esta situación coincidió con la ruptura de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. Sin embargo la respuesta de los grupos guerrilleros fue significativa²⁴ (ver tabla 1) y aunque en los años siguientes la situación parecía mejorar²⁵, las denuncias sobre violación a los derechos humanos y transgresiones del Derecho Internacional Humanitario no cesaron de repetirse e incluso se incrementaron²⁶.

Sin duda lo anterior denotaba una dificultad para distinguir y salvaguardar a la población civil de las acciones de los bandos enfrentados (ver gráfica 3)²⁷; esta

²² Esta institución echó a abajo el decreto que le dio vida a la “zona de rehabilitación y consolidación”.

²³ En 2005 la actividad petrolera aportaba cerca de 100.000 barriles diarios a la economía del país en cerca de 250 pozos activos y hacían presencia una empresa del estado (Ecopetrol) y por lo menos tres transnacionales (OXY, Repsol y Hocol). De tal magnitud eran los intereses que se conjugaban en Arauca que el Gobierno de los Estados Unidos destinó, en la época, un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares para la seguridad petrolera.

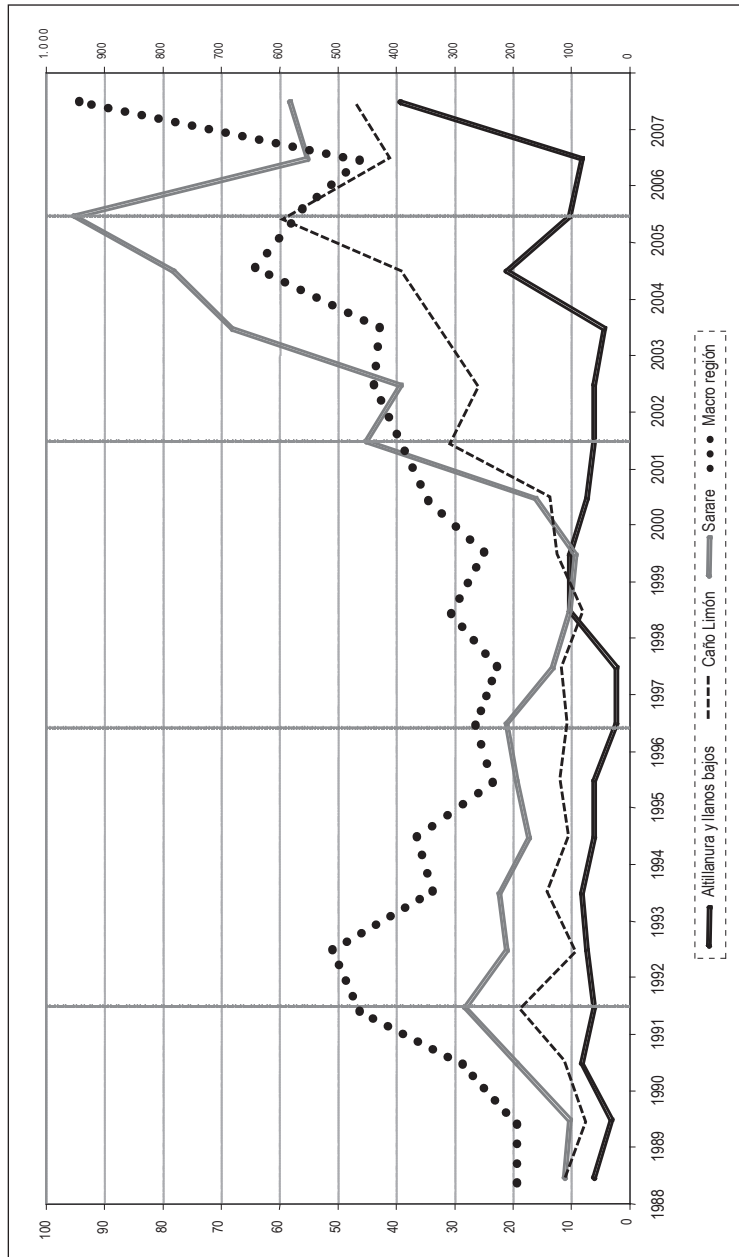
²⁴ Entre 2002 y 2004 se registraron 50 atentados contra la infraestructura petrolera y 345 atentados con explosivos (minas y bombas) atribuidos a estos grupos (Farc y ELN).

²⁵ Entre 2005 y 2006 se contabilizaron cinco atentados contra la infraestructura petrolera y 51 atentados con explosivos.

²⁶ Para mencionar apenas algunos datos sobre la delicada situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario en Arauca se puede decir que, en el periodo 2003-2006, se cometieron 1.302 homicidios de los cuales cerca de 744 (57%) fueron relacionados con motivaciones políticas o asociadas al conflicto armado. Se “contabilizaron” 8 masacres con 46 víctimas civiles y el asesinato selectivo de 12 maestros y 13 sindicalistas. Fueron asesinadas 13 personas, integrantes de las comunidades indígenas; dos periodistas y cuatro concejales municipales. Cerca de 20.466 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y pertenencias; otras 78 fueron retenidas o secuestradas. Igualmente, 60 civiles resultaron heridos y otros 10 murieron por minas antipersonal.

²⁷ En una revisión de prensa del año 2005, es frecuente encontrar noticias sobre asesinatos selectivos y masacres en Arauca y Casanare. En la zona limítrofe entre estos dos Departamentos (Tame, Puerto Rondón, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Sácama) parece concentrarse el enfrentamiento, primero, entre los grupos guerrilleros (Farc y ELN) y los paramilitares (Bloque Vencedores y Autodefensas de Casanare) y, luego, entre estos mismos grupos insurgentes; con todo, esta última guerra se extendió al centro de Arauca y abarcó también territorio de Arauquita, Saravena, Puerto Rondón, etc. (*El Tiempo*, 4 de enero de 2005, 1-3).

Gráfica 2
Eventos totales de conflicto



Fuente: Cerac

dificultad de percepción no solo fue propia de los grupos irregulares (guerrillas y paramilitares) sino que afectó también y de manera notoria a los organismos de seguridad del estado²⁸. Esta situación de limitación o negación de garantías y derechos humanos y civiles, aunada a la corrupción administrativa y a las dificultades económicas de los más pobres, conllevaron una crisis de apreciables repercusiones sociales y políticas en las zonas fronterizas, habida cuenta, por ejemplo, los desplazamientos de población colombiana a Venezuela²⁹ y la intensificación de las actividades de contrabando (combustible, bienes de consumo, etc.), el abigeato, la extorsión y el secuestro. Sin mencionar el incremento de las áreas sembradas de coca en Arauca³⁰ y las actividades de narcotráfico hacia los países vecinos.

Los efectos del conflicto sobre la población civil adquieren mayor relevancia política si se tiene en cuenta que, como arriba se anotó, en Arauca muchas organizaciones e instituciones sociales surgieron o se entronizaron con el proceso colonizador. Este hecho tiene características de relativa novedad y conserva particularidades que es necesario reconocer dentro de un contexto nacional. Así, el mapa de actores y organizaciones sociales es bastante complejo y muy variado en la expresión de los distintos intereses³¹. Se forjaron diferentes procesos organizativos ligados a formas de autogestión a través de

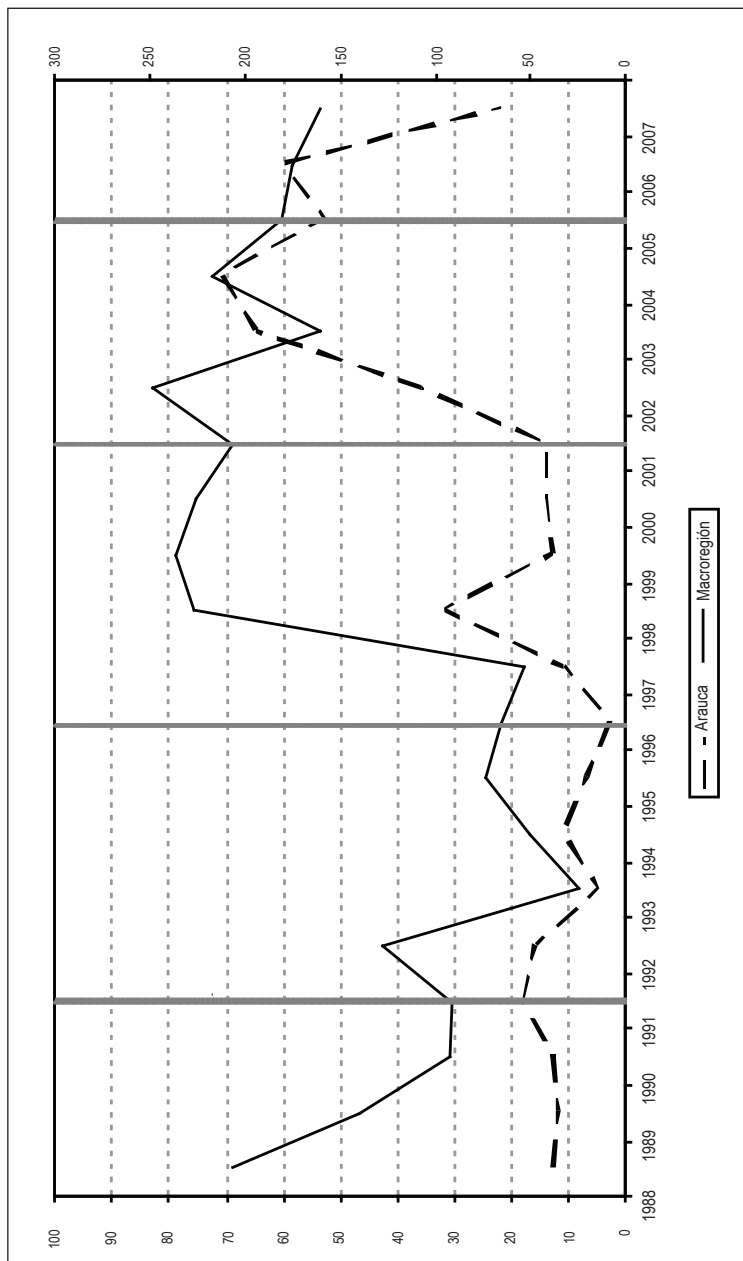
²⁸ Quizás el caso más sonado fue el asesinato de tres dirigentes sindicales en Saravena (agosto de 2004), por el cual la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cuatro oficiales del Ejército y tres soldados profesionales.

²⁹ En este sentido fueron reveladoras las declaraciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos humanos para el caso Arauca (*Vanguardia Liberal*, 1 de junio de 2006, 2A).

³⁰ El área de cultivos de coca pasó de 978 hectáreas en 2000 a 1.883 ha. en 2005; con un incremento total, en seis años, de 192%.

³¹ Existe, por ejemplo, una red sindical agrupada en la CUT- Arauca y compuesta principalmente por los sindicatos petroleros (USO-Arauca), Sintracarnes, Sintraelectra, Asedar, Anthoc; también algunas organizaciones del sector agropecuario y rural como la Aduc-Arauca, ACA, Fensuagro, Anmuisc-Arauca; otras asociadas al sector cooperativo como Cooagrosarare, Cootransarare; igualmente las asociaciones de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas como Ascaditar, Asou'wa. Al lado de estas organizaciones están también la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional (Asojer), la Asociación de Mujeres de Arauca (Amar), Amanecer de Mujeres por Arauca, el Comité permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y el Colectivo de Abogados Joel Sierra. Finalmente, un papel destacado ha jugado la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena, E.C.A.A.S, para muchos, empresa modelo de prestación de servicios, a cargo de la comunidad.

Gráfica 3
Civiles muertos en eventos de conflicto



Fuente: Cerac

organizaciones comunales, asociaciones de trabajos agrícolas, cooperativas de productores y posteriormente a formas de organización sindical, que dieron origen a un entramado social altamente cohesionado³².

El punto neurálgico de reflexión, solidaridad y movilización de las organizaciones sociales, desde 2002, ha sido la lucha por el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, amenazados y vulnerados, a su opinión, por todos los actores participantes en el conflicto. En este sentido, son muchas las acciones de promoción, protección y defensa de los mismos que han venido y vienen adelantando distintos organismos e instituciones, de carácter internacional, nacional, regional y local. A esto se agrega la preocupación por otros temas generadores de conflicto y desarraigo como las fumigaciones aéreas con glifosato. Es notorio también el énfasis reciente puesto por la red organizacional en los temas ambientales.

En conclusión, la encrucijada tendida por las percepciones y las acciones de los actores del conflicto sobre la naturaleza y el papel que cumplen las organizaciones de la sociedad civil ha llevado a que éstas asuman, lo que ellas mismas llaman, lógicas de “resistencia” para impedir su desmantelamiento y mantener sus formas de representación. Las mismas circunstancias presionan para que las organizaciones asuman posiciones de distanciamiento frente al estado y desmientan de manera explícita y permanente su posible vinculación o afinidad con los grupos guerrilleros. En otras palabras, las organizaciones sociales parecen avocadas a ganar un nuevo espacio político y a racionalizar sus reivindicaciones e intereses en discursos que las separen formalmente del conflicto; se niegan a enfrascarse en un juego de polarización (Tilly, 2007) y rehúsan aceptar las fronteras sociales (nosotros-ellos) que los separarían de supuestos adversarios dentro de la institucionalidad oficial (organismos de seguridad).

³² Son organizaciones campesinas, sindicales, étnicas, de mujeres, ambientales, de desarrollo comunitario. Su categorización y relación con otros movimientos sociales o su historia de movilizaciones es una historia por documentar.

El estado departamental

Hasta 2007 se observó una aparente “recomposición” de la clase política como efecto del conflicto, que se manifestó en un mayor grado de obediencia a las directrices del estado central. También tomaron impulso los partidos de la coalición de gobierno como una forma de afianzar la política de Seguridad Democrática. De este intento fueron destacables algunos resultados electorales: en marzo de 2006 salieron elegidos dos candidatos a la Cámara de Representantes por Arauca, uno del Partido Convergencia Ciudadana y otro por Cambio Radical. En opinión de estos sectores políticos, la presencia y acciones de las Fuerzas Armadas tenían un papel clave en la recuperación del territorio para el estado; así, por ejemplo, éstas cumplieron un papel de control y garantes en la realización de campañas políticas y elecciones desde 2002. Con todo, aún en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2006, los candidatos de los siete municipios del Departamento afrontaron amenazas de las Farc y del ELN.

En ciertos ámbitos de opinión regional se tenía la impresión de que la vida política institucional en los municipios había estado signada por la baja participación ciudadana en asuntos de gobierno y las administraciones habían estado de espaldas frente a los gobernados. Esto era perceptible en las discusiones que se entablaban alrededor del efecto de los recursos de las regalías en el desarrollo y en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; incluso algunos afirmaban que el petróleo se había convertido en una “maldición” dado que estimulaba el crecimiento desordenado de los municipios, los conflictos por la tierra, la corrupción administrativa, el deterioro del medio. Como se mencionó, el destino privilegiado de las regalías había sido la construcción de obras civiles y vías de comunicación, en menoscabo de inversiones clave como la diversificación productiva, la educación y la salud pública.

Era aceptado que el escenario político de los municipios se caracterizaba por el desgüeño administrativo, la falta de compromiso de los gobiernos locales con sus comunidades y la debilidad en la participación de éstas en asuntos públicos

y políticos. La presencia de la guerrilla y su promoción del poder popular en nada habían cambiado esta realidad. Así, la puesta en marcha de la política de Seguridad Democrática, en 2002, por su excesivo énfasis en la protección de la infraestructura, la economía petrolera y el afianzamiento electoral del Uribismo, develó aún más esta situación y mostró que la recuperación del territorio y la confianza de la población requerían de un tratamiento más cuidadoso, basado en la inversión de carácter social y el acercamiento a sectores influyen en el contexto económico regional. A la cabeza de esta tarea se puso el gobernador Julio Acosta³³, elegido en 2004, a nombre de Cambio Radical.

De ahí la aparente importancia concedida por este Gobernador al tema de la inversión de recursos bajo el régimen de la Ley de Regalías y el afán de mostrar con frecuencia balances, al menos formales, de su gestión. En opinión de la coalición uribista esto redundaba en la recuperación de la institucionalidad en este territorio y fortalecía la política de Seguridad Democrática. Llama la atención que esta administración departamental (2004-2007) pretendiera basar su estrategia de fortalecimiento en la “inversión social” y junto con el Gobierno Nacional impulsaran programas de reactivación de mercados regionales, crecimiento y reconversión productiva, con especial énfasis en zonas rurales afectadas por la presencia de cultivos de coca y grupos guerrilleros.

Con todo, la línea de desarrollo regional propuesta por el Gobernador no difirió en mucho de lo expuesto por sus antecesores o por organismos de planificación regional en los 20 años anteriores, que consideraban la inversión en obras de infraestructura como el eje de cualquier estrategia a largo plazo. Así mismo este Plan de Desarrollo de Arauca se basó en el impulso a proyectos de desarrollo económico sostenible en dos frentes nada novedosos: impulso a la ganadería competitiva y a la agricultura comercial y agroindustrial³⁴.

³³ Resulta paradójico que este político, de origen liberal, fuera señalado, durante su mandato como Alcalde de Arauca (1988-1990), de promover la construcción de obras suntuarias y desproporcionadas (verdaderos elefantes blancos). Además, se decía, Acosta había sido víctima, desde 1990, de ocho atentados contra su vida, atribuidos todos a la guerrilla.

³⁴ Otros frentes del Plan son el “ecoturismo” y la lucha contra el contrabando.

En noviembre de 2006, Acosta se manifestaba satisfecho de entregar un balance con superávit de la Gobernación, de lograr una importante inversión social y de poder garantizar la seguridad en el tránsito por las principales vías del Departamento, algo que recalcaba, era imposible apenas dos años antes por las acciones de la guerrilla. Todo lo cual evidenciaba, según él, un manejo más transparente de los recursos petroleros. En un tono similar y por la misma época el Alcalde de Arauca respondió a lo que consideraba eran retos de la administración de la capital. Por este camino parecería que apenas en ese momento en el Departamento, los mandatarios descubrían los beneficios de formular planes de gobierno y aplicar a ellos las evaluaciones técnicas; en contraste, asociaban la corrupción y el desvío de recursos públicos a la guerrilla con la ausencia de normas y controles técnicos. Para ellos, un antídoto frente a la influencia de la subversión era el fortalecimiento de la tecnocracia en todo Arauca.

Las Fuerzas Armadas

La presencia de las Fuerzas Armadas es ostensible en el territorio del Arauca³⁵; es posible ver a sus integrantes en los aeropuertos, sobre la troncal del piedemonte, en la vía que conduce de Arauca a Saravena, en Caño Limón, en la transversal Tame-Arauca, en Puerto Rondón, en Cravo Norte, en la vía que conduce a Santander, a la altura de Cubará y Gibraltar, a lo largo de la frontera sobre el río Arauca. En los principales municipios existen bases militares importantes, en los epicentros de la explotación petrolera (OXY y Repsol) se mantienen estrictas medidas de seguridad y el oleoducto Caño Limón-Covenas es custodiado y monitoreado las 24 horas del día. En otras palabras, por la presencia de esta institución se palpa en la vida cotidiana la ejecución de la política de Seguridad Democrática; tanto o más que en otros departamentos como Meta o Caquetá.

³⁵ Este Departamento hace parte de la Segunda División del Ejército, y tienen allí funciones la Brigada 18 y Móvil Número 5, además del Comando Operativo 18. En los primeros dos años del mandato Uribe el pie de fuerza se incrementó de 5.766 a 7.839 efectivos. De este total, 3.000 (60%) se dedican a la protección de los campos petroleros, los 178 kilómetros de oleoducto y las 320 torres de energía eléctrica.

En estas circunstancias los enfrentamientos entre la fuerza pública y los frentes, compañías y columnas móviles de los grupos guerrilleros son frecuentes, especialmente, en zonas rurales de los municipios de Tame, Arauquita, Saravena, Arauca y Fortul, sobre el piedemonte y en las sabanas orientales. Hasta 2005 se habían contabilizado más de 65 combates³⁶. Se tenían, entonces, pruebas empíricas y se apreciaba de forma directa que el conflicto no era un fenómeno marginal ni en lo espacial ni en lo demográfico, menos en lo económico debido a que en los centros urbanos o en las cercanías de las explotaciones petroleras y en las zonas productoras de coca se habían registrado noticias de combates o se había detectado la presión o la presencia directa de milicias o estructuras más visibles de los grupos guerrilleros y de destacamentos del Ejército o la Policía. Tan delicada era esta situación de conflicto que, en abril de 2005, algunos representantes políticos pidieron al presidente Uribe revisar su política de seguridad para Arauca, luego de fuertes golpes propinados por la guerrilla a las Fuerzas Militares³⁷.

Con todo, es necesario resaltar que los desencuentros entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil persistían. En opinión de las organizaciones defensoras de derechos humanos, este plan de seguridad había significado la persecución y señalamiento a habitantes del área del oleoducto, en especial pequeños productores campesinos, cuando no la expulsión de sus tierras, la privatización de espacios públicos y el montaje de un sistema de medidas que vulneran la

³⁶ En el periodo 2002-2005 se presentaron 49 combates entre la fuerza pública y la guerrilla (Farc y ELN) en el sector del piedemonte (Saravena, Fortul y Tame), 13 en Arauquita y Arauca y solo tres en la zona limítrofe entre los departamentos de Arauca y Casanare. Entre guerrilla y paramilitares se registraron seis combates en el piedemonte, una entre Arauca y Arauquita y dos en la zona limítrofe entre los departamentos de Arauca y Casanare. En contraste, durante el mismo periodo se tiene noticia de un (1) enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y los paramilitares del Bloque Vencedores y las Autodefensas Campesinas de Casanare.

³⁷ La actividad de la Segunda División del Ejército en Arauca, con las Brigadas 18 y Móvil 5, había sido intensa en su persecución a los grupos guerrilleros. Así, en febrero de 2005 se tuvo noticia de la ejecución de la “Operación Ballesta” y de sus primeros resultados en términos de combates, incautación de armas y recuperación de territorio. Con todo, esta operación de grandes proporciones mostró también la fortaleza que aún conservaban las guerrillas; los campos minados, las “casas bombas”, el tipo de armamento utilizado, las emboscadas, la voladura de torres de energía, el número de insurgentes y la resistencia que ofrecían evidenciaron esta situación. Aunque la misma operación se diseñó para perseguir al Bloque Vencedores de las autodefensas, los informes del Ejército a la opinión pública no dan cuenta de resultados concretos sobre este grupo.

libertad de tránsito de los pobladores por las carreteras de Arauca. Incluso iban más allá y señalaban que el incremento de la presencia de fuerza pública estaba acompañado de la actuación libre de grupos paramilitares que asesinaban y pedían la salida de líderes sociales bajo amenazas de muerte (*Voz*, 22 de febrero de 2005, 8).

En esta perspectiva existía un “frente social” en esta política de seguridad que consistía en debilitar a las organizaciones que representan los intereses de los colonos, campesinos, sindicalistas, indígenas y se habían declarado en abierta oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Al mismo tiempo se estaba dando espacio y fortaleciendo ciertos programas diseñados para consolidar la “presencia” del estado en zonas de conflicto (Familias en Acción, Guardabosques, etc.); esto mismo estaba complementado con la subordinación, un tanto coercitiva, de organizaciones sociales, el impulso electoral y el levantamiento de gobiernos pertenecientes a la coalición uribista.

Como se mencionó, pese a las ofensivas de las Fuerzas Militares la guerrilla parecía tener capacidad de respuesta y mantenían control territorial en algunos puntos de Arauca. Esto fue cierto por lo menos hasta 2006. En aspectos referidos a la política y el diálogo social, los planes de seguridad del Gobierno Nacional mostraban serias limitaciones y la fortaleza de la guerrilla era atribuida con sorna, por los comandantes del Ejército, al apoyo dado por las organizaciones sociales y la población a la subversión. En consecuencia, ciertas dimensiones de la comunicación positiva entre la sociedad y el estado estaban pasando por un mal momento³⁸, existía un distanciamiento y hasta desconfianza en temas sensibles como preservación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sin duda era ambiente que tendía a la polarización, muy a pesar del discurso gobiernista de la seguridad.

³⁸ Cabe resaltar que la puesta en marcha de la política de Seguridad Democrática en Arauca tuvo como base una fuerte coordinación entre organismos del estado y algunos sectores sociales y económicos (ganaderos, transportadores, comerciantes) y, obviamente, los gobiernos locales. Como lo proponía esta política, la idea era crear “confianza” entre el gobierno y la población civil para que ésta “denunciara a los grupos terroristas” y conformara “redes de cooperantes”.

Sin temor a exagerar se puede decir que esta situación de distanciamiento y desconfianza entre la sociedad y el estado todavía se mantiene en Arauca, a pesar de los avances de control territorial de las Fuerzas Armadas durante 2006 y 2007. Las dificultades vividas por la población civil a lo largo de años anteriores a causa del conflicto, sin duda, han contribuido a este malestar que se manifiesta de diversas y antagónicas conductas individuales y colectivas de retraimiento, pasividad, organización o denuncia, de apoyo al estado o de búsqueda de soluciones parciales y casuísticas. Esta sucesión de hechos sociales no escapan a las percepciones de los gobiernos locales sin que se pongan en marcha alternativas democráticas al respecto.

Es claro que en Arauca ha tenido lugar un pulso militar entre el estado y la guerrilla de gran importancia para la suerte de la política de Seguridad Democrática y los objetivos tácticos y estratégicos de los grupos guerrilleros, esto queda en evidencia en hechos como el paro armado de octubre de 2005 que llevaron a un ajuste de aspectos muy particulares de la misma y referidos al territorio fronterizo y a las características del conflicto armado en Arauca³⁹.

Los grupos paramilitares

Para finalizar cabe decir algo sobre este fenómeno. Hoy se dice que estos grupos paramilitares ingresaron “tarde” al territorio de Arauca y lo hicieron desde Casanare (Hato Corozal y Paz de Ariporo) y la zona limítrofe entre Meta y Vichada (Puerto Gaitán, Cumaribo); desde allí realizaron las primeras incursiones en los años 1999, 2000 y 2001 logrando cierto establecimiento en las zonas urbanas de Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte. Las primeras acciones de estos grupos consistieron en el asesinato de líderes agrarios, sindicales, políticos y periodistas, en lo que no eran, con propiedad, “operativos contrainsurgentes”. Sin duda en este breve posicionamiento jugó un papel cla-

³⁹ Durante 23 días las Farc mantuvieron paralizada la economía del Departamento y realizaron acciones bélicas contra la fuerza pública. Distintos organismos del estado actuaron con urgencia para contrarrestar los efectos de las acciones de una guerrilla; sin embargo fue un “decreto” del Frente 10 de las Farc lo que permitió el levantamiento del paro y el “retorno a la normalidad” de la economía de Arauca.

ve las relaciones sociales y económicas de estos municipios con sectores que en Casanare y Meta fundaron otros grupos paramilitares (las Autodefensas Campesinas de Casanare y las Autodefensas de Meta y Vichada) en los años noventa. Con todo, es 2003 el año en el que con mayor fuerza se sienten las acciones de los paramilitares contra la población civil y los grupos guerrilleros en Arauca (ver gráficas 2 y 3)⁴⁰. El Bloque Vencedores de Arauca, dirigido por los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, reconocidos narcotraficantes, se desmoviliza en diciembre de 2005, en la vereda Puerto Gaitán de Tame.

Se afirma, también, que el paramilitarismo entró a Arauca prohijado por los destacamentos militares oficiales, lo cual facilitó la implantación de las primeras estructuras a cargo del Bloque Centauros, pero durante los años 2001 y 2002 se produjo la operación de compra-venta de las llamadas “franquicias” que dio origen a la conformación, por parte de los hermanos Mejía Múnera, del Bloque Vencedores de Arauca. Como se sabe, el Bloque Centauros, o mejor su marca, fue adquirida, también a los hermanos Castaño Gil, por Miguel Arroyabe, quien se convirtió en su jefe y propietario indiscutible y se expandió por todo el Meta y parte del Casanare, dando inicio a la guerra intraparamilitar entre éste y las fuerzas de alias Martín Llanos, amo y señor, hasta entonces, de las Autodefensas Campesinas del Casanare (González, 2007).

Cabe advertir que la presencia paramilitar en Arauca fue limitada y su afianzamiento fue rápidamente contrarrestado por la reacción de la guerrilla en zonas neurálgicas del territorio y su desmovilización contribuyó a cerrar, de alguna forma, un ciclo de violencia. Como fuere, el año de la desmovilización del Bloque Vencedores (2005) fue también el momento del arranque del enfrentamiento con las Farc y el ELN, justamente en los alrededores de Tame.

⁴⁰ Existen evidencia empírica para afirmar que civiles eran las víctimas preferidas de los paramilitares en Arauca. De acuerdo con el análisis de prensa, entre 2002 y 2005, estos grupos fueron responsables de 57 acciones en su zona de influencia en Arauca; en contraste con 11, en el periodo 1997-2001.

El conflicto armado hoy

El discurso oficial proclama el triunfo de la política de Seguridad Democrática y el retorno de la tranquilidad y prosperidad a Arauca, por lo menos desde finales de 2005. Fue interés del gobernador Acosta Bernal mostrar los cambios que su administración introdujo con apoyo del gobierno del presidente Uribe, aún en los momentos más críticos. Llama la atención que el 20 de diciembre de ese mismo año, Acosta sufriera un grave atentado que por poco le cuesta la vida, tras lo cual denunció la existencia de un “complot de política y guerrilla” contra su vida. Por su parte, el presidente Uribe se comprometió a incrementar, aún más, el pie de fuerza en Arauca.

Aún así el año 2007 se abrió en un clima de optimismo entre la clase política y las Fuerzas Militares de Arauca. Según la información oficial, el año inmediatamente anterior los homicidios se redujeron en 35%, los atentados terroristas bajaron 47%, el secuestro extorsivo cayó 12%, decrecieron los cultivos de coca⁴¹ y el estado aumentó el control territorial. Sin duda un balance positivo para la política de Seguridad Democrática. Con todo, la prensa daba cuenta, también, de importantes acciones de la guerrilla y de combates contra el Ejército en enero de 2007; sin contar con los pronunciamientos y las acciones de las entidades de derechos humanos contra el asesinato de civiles a manos de las “Águilas Negras” y los “falsos positivos” del Ejército en zonas rurales de Saravena y Arauquita. Además comenzaba un año electoral y se escuchaban en algunos municipios (Fortul y Arauquita) denuncias sobre intimidaciones a los eventuales votantes, provenientes de los grupos guerrilleros. En este mismo contexto creaba confianza en el Ejército la muerte en combate o la captura de importantes mandos de frentes del ELN y las Farc en todo el oriente del país.

⁴¹ Apenas un detalle: según estos informes, se destruyeron 362 hectáreas de coca mediante el sistema de erradicación manual, 60% más que en 2005.

En el plano político, el primer trimestre de 2007 estuvo salpicado por debates y rumores sobre las elecciones en Arauca. Cabe resaltar la inquietud que despertó el supuesto apoyo del presidente Chávez a ciertos precandidatos a la Gobernación y ciertas alcaldías de Arauca con la intención de tener “amigos” en puestos de mando civil. Esto se dijo, por ejemplo, de Edgar Matus y Esperanza Sandoval, pertenecientes al grupo político que encabezara el asesinato congresista Alfredo Colmenares⁴². Algunas fuentes incluso afirmaron que el ELN y las Farc estarían detrás de algunas campañas. Mientras tanto sucedían amenazas y asesinatos de candidatos de diversas corriente ideológicas. Se prolongaba así la violencia política y la influencia del conflicto en las elecciones, con el ingrediente, inédito en el pasado reciente, de involucrar el supuesto apoyo de sectores sociales e institucionales de Venezuela.

En abril de 2007, la situación de conflicto en algunas zonas de Arauca despertaba preocupación entre las organizaciones sociales. Por una parte ocurrían combates entre las Farc y el ELN⁴³; por otra, las Fuerzas Militares adelantaban operativos contra los insurgentes en los cuales resultaba afectada la población civil⁴⁴. En mayo la violencia parecía desbordar los efectos sobre la población civil. Mientras tanto el gobernador Julio Acosta Bernal se defendía de nuevas acusaciones ante la Fiscalía sobre nexos suyos con el paramilitarismo⁴⁵.

Poco más tarde, en agosto, las Farc decretaron un nuevo paro armado que no tuvo difusión en los medios pero afectó la comunicación entre Arauca y Norte de Santander por una semana. Llegado septiembre, el aclamado mejoramiento de la “situación de orden público” no convencía a las organizaciones de derechos humanos para asumir un lenguaje menos enfático en sus denuncias. Este clima de violencia y conflicto armado se vivía en vísperas de las elecciones.

⁴² Tanto Matus como Sandoval, radicados en Venezuela, negaron el supuesto apoyo de Chávez y dijeron temer por sus vidas.

⁴³ A estas alturas se hablaba de más de 300 muertos dentro de esta disputa.

⁴⁴ En particular, los primeros combates (Farc-ELN) provocaban una emergencia humanitaria en Tame.

⁴⁵ Se decía que los Mellizos Mejía Múnera, dueños del Bloque Vencedores de Arauca, habían comprado para Acosta la franquicia de Cambio Radical y la Gobernación de Arauca.

nes municipales y departamentales de octubre. En efecto, éste fue un mes de intenso forcejeo y acusaciones entre los ocho candidatos a la Gobernación de Arauca⁴⁶.

Al final, el triunfo fue para el candidato de Cambio Radical, Freddy Forero, amigo y aliado del Gobernador saliente⁴⁷. Otro hecho significativo en la coyuntura que siguió a las elecciones fueron los golpes propinados por las Fuerzas Armadas a las guerrillas en Arauca, en lo que parecía ser la consolidación de la toma de iniciativa de las primeras sobre las segundas. Así mismo, las últimas campañas políticas y elecciones en el Departamento (2003, 2006 y 2007) han estado acompañadas, de una parte, de numerosas amenazas y atentados a los candidatos, en especial de la coalición uribista y, de otra, detenciones masivas y judicialización de líderes y candidatos de izquierda. A esto se añadiría los asesinatos de funcionarios públicos y dirigentes políticos en algunos municipios.

El balance final de los resultados de la política de Seguridad Democrática en Arauca está por realizarse, pero un hecho es incontrovertible: durante 2007 los indicadores adaptados para medir la violencia y el conflicto armado mostraban variaciones ascendentes; el atentado contra el Alcalde Electo de Arauquita, Francisco Vargas, en enero de 2008, fue apenas una muestra. También lo reconoce el Observatorio de la Vicepresidencia⁴⁸: la cifra de homicidios creció 79%, al pasar de 72 en 2006 a 129 en 2007; el secuestro se incrementó 50%, en 2006 se conocieron seis casos, en 2007 fueron reportados nueve; el número de personas desplazadas aumentó de 2.069 a 2.672 en el mismo periodo, lo que representa una variación de 29%, y los eventos por minas antipersona subieron de 34 a 55, o, lo que es igual, mostraron un incremento

⁴⁶ Los partidos políticos y los candidatos a la Gobernación fueron: Freddy Forero de Cambio Radical, Adalberto Jaimes del Partido Liberal, Albeiro Vanegas del Partido de la U, Edgar Ortiz del Polo Democrático, Nuby Sandoval de Apertura Liberal, Luis Ávila de Partido Verde, Alirio Arango de Colombia Viva y Jesús Salazar del Movimiento Afrocolombiano; la mayor parte pertenecientes a la coalición uribista.

⁴⁷ Freddy Forero obtuvo el 38,94% de los votos válidos para la Gobernación; le siguió Adalberto Jaimes con el 21,67%. La abstención alcanzó 45,6% del potencial electoral (131.647 personas).

⁴⁸ Cabe resaltar que esta fuente hace comparaciones de los incrementos por semestres, en este caso 2006 y 2007 incluye apenas datos entre enero y junio.

de 62%. Salta a la vista que durante 2007, Tame, Saravena y Fortul fueron los municipios más golpeados por la violencia y el conflicto⁴⁹.

En el último año (enero 2008-2009) se conoció un relativo incremento en los indicadores de violencia. Como lo señala el Observatorio de la Vicepresidencia, entre enero y junio de 2008, se produjo un incremento del 19% en los homicidios⁵⁰, entre éstos algunos indígenas y sindicalistas. Otros indicadores parecían mejorar, el desplazamiento y el secuestro descendían. Sin embargo, las acciones violentas y la guerra se recrudecen en mayo y se mantienen con intermitencia en septiembre, octubre y diciembre. Así mismo, los escándalos por la vinculación de la clase política con el paramilitarismo y la malversación de los recursos parecían desmentir lo sostenido por la administración de Julio Acosta. Se rumoraba también que las guerrillas comenzaban un proceso de reorganización interna y relocalización territorial.

En enero de 2009, se denuncian nuevas “ejecuciones extrajudiciales” a manos de desconocidos y se conocen nuevos detalles de los vínculos del ex-gobernador Julio Acosta con distintas redes paramilitares; asunto que no resulta del todo ajeno a la destitución del, hasta ese momento, gobernador Freddy Forero, también de Cambio Radical, por inhabilidades para ejercer el cargo⁵¹. Las guerrillas, por su parte mantenían las amenazas contra los gobiernos locales. Esta cadena de hechos señalaba la tendencia violenta y el amago de crisis política que se insinuaría durante el primer trimestre.

Consideraciones finales

Se puso a prueba aquí un análisis que relacionó, en dos dimensiones (una histórica y otra coyuntural), algunas variables: territorio, conflicto armado,

⁴⁹ Este deterioro tiene una relación importante con los enfrentamientos entre el ELN y las Farc, ocurridos en el piedemonte y en la zona fronteriza del río Arauca. También las llamadas bandas emergentes, nuevas o rearmadas estaban detrás de algunos asesinatos de líderes comunitarios e integrantes y activistas de organizaciones sociales o de derechos humanos.

⁵⁰ Como se mencionó este incremento se relaciona con el mismo periodo de 2007.

⁵¹ El Consejo de Estado anuló su elección el 23 de octubre de 2008.

violencia política y presencia diferenciada de estado, en el interior de Arauca. La dimensión histórica informó sobre un trabajo de reconstrucción de la dinámica de retroalimentación de dichas variables en cerca de veinte años (1988-2008) y destacó algunas conclusiones de alcance intermedio (entre lo empírico y lo teórico); la segunda (coyuntura) acudió a la descripción cronológica de una serie de hechos decididamente empíricos y cargados de valoraciones (según cada actor). Presentar ambas dimensiones y otorgar un peso mayor (en extensión e información) era, sin embargo, necesario en un ejercicio de sistematización y relacionamiento para sustentar lo que sigue:

- El territorio y su construcción social (espacialidad) no ha sido solo telón de fondo para la violencia y el conflicto o para la presencia y actuación del estado; sin duda sucede algo muy distinto: territorio, sociedad y política se condicionan y se moldean mutuamente.
- En Arauca el estado marchó a la zaga del poblamiento y los procesos de acumulación de capital, su perfil coercitivo sobresalió sobre su capacidad para regular conflictos; por esta razón su presencia ha sido más notoria en la capital (Arauca), en Caño Limón o sobre el piedemonte (Saravena, Fortul, Tame)⁵². Esta tendencia se mantiene aún hoy; no obstante el esfuerzo hecho por el gobierno central por extender su control a todo el territorio. En consecuencia capacidad de control sobre población y territorio bajo reglas de juego democráticas continúan siendo factores decisivos en el Departamento.
- A nivel social son numerosos y variados los cuestionamientos sobre la legitimidad de las actuaciones del estado; la lejanía entre gobernados y gobierno ha sido base para la organización de grupos guerrilleros (especialistas en violencia, en el lenguaje de Tilly) y el mantenimiento de organizaciones sociales con profundo retraimiento institucional (identidades centradas en sí mismas). Éste ha sido un escenario propicio para la actuación de agentes que fomentan distintas formas de violencia política.

⁵² Esto es, sobre lo que se denominan aquí las subregiones de Caño Limón y Sarare, las dotadas con recursos naturales y población.

- Las agrupaciones partidistas locales y regionales muestran cierta “fragilidad” que, sin embargo, el estado central y, en especial, los últimos gobiernos (Pastrana, Uribe) han intentado solventar articulando los procesos electorales y los planes de las administraciones locales y departamentales a grandes directivas nacionales. Aún así, estas instancias de gobierno y aquéllas agrupaciones adquirieron cierta dinámica que las vinculó, incluso antes, al conflicto y a la ilegalidad como formas de sobrevivir y aspirar a negociar con el mismo estado central reivindicaciones o intereses propios.
- La guerrilla tiene raíces muy profundas en la historia de Arauca, en su configuración misma como espacio de frontera, que conviene no despreciar (en lenguaje de Lasalle, son factores reales de poder); los distintos planes contrainsurgentes han reconocido este poder y sería deseable ensayar propuestas de negociación para detener la emergencia humanitaria desatada por la violencia política y el conflicto armado. Este tema tiene dimensiones de seguridad distintos a los enfatizados por el actual gobierno y se relaciona con la política internacional (Colombia-Venezuela) en una zona de frontera.
- A manera de hipótesis se sostiene que el conflicto armado y la violencia política son fenómenos centrales de la sociedad araucana; también que las principales víctimas han sido civiles y que las incursiones paramilitares al lado de las operaciones contrainsurgentes, primero, y los enfrentamientos entre las Farc y el ELN, después, son los hechos de mayor relevancia sobre este particular. En particular, los últimos siete años han sido decisivos para la reactivación o la edificación de fronteras entre amigos-enemigos (Tilly, 2007); así por ejemplo sectores de los partidos que realizaron acuerdos con la guerrilla hoy son activos partidarios de su derrota; las incursiones paramilitares propiciaron alianzas entre guerrillas, desaparecidos aquéllos, facciones guerrilleras han buscado pactos temporales con sectores del Ejército y bandas de traficantes de droga y contrabandistas.
- También se ponen en evidencia las responsabilidades, activas o pasivas, de las Fuerzas Militares y del estado, en su conjunto, en la escalada tanto del conflicto armado como de la violencia política, a su vez reedición de otras pasadas, debido a cierto sesgo coercitivo y a las insuficiencias institucionales y participativas de la política de Seguridad

Democrática. En efecto, esta política no ha sido entendida como un laboratorio de paz⁵³.

- El enfrentamiento entre las Farc y el ELN tiene como puntos de partida los *distintos modelos de organización social y económica* que promueven estas organizaciones dentro de algunos núcleos de población⁵⁴ y la lucha por el poder político y el manejo de recursos económicos en los municipios y en el Departamento. El grado que ha alcanzado dicho enfrentamiento muestra la relativa influencia que mantienen las guerrillas dentro de la población y su peso dentro de los balances de poder político.
- La necesidad de construir una base empírica sobre la cual dar cuerpo a un análisis de tipo sociológico sobre el conflicto y la violencia, que intente, además, incluir dentro de un marco relacional las motivaciones y los intereses de los actores, antes de cobijarlos con determinado enfoque teórico para hechos de largo duración.

Bibliografía

Carr, Edward, 1983, *¿Qué es historia?*, Barcelona, Ariel Historia.

Crisis Group, 2007, “Los nuevos grupos armados de Colombia”, en Crisis Group, *Los nuevos grupos armados de Colombia. Informe Sobre América Latina. Policy Report*, número 20, 10 de mayo.

Deas, Malcolm y Gaitán, Fernando, 1995, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Bogotá, Fonade/DNP.

⁵³ En efecto, dentro de ciertos círculos regionales, el Gobierno (Nacional y Departamental) ha presentado algunos proyectos de desarrollo productivo como parte de la política de Seguridad Ciudadana y como formas de superar la violencia y acimatar la paz.

⁵⁴ Un buen ejemplo de esto es la posición de las guerrillas frente a las plantaciones coca; si las Farc facilitan su establecimiento en las propiedades campesinas, el ELN las acepta a regañadientes.

Delgado M., Ovidio, 2001, “Espacio, territorio y ambiente”, en *Espacio y territorios. Razón, pasión e imaginarios*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-Red Espacio y Territorio.

González, Fernán; Bolívar, Ingrid y Vásquez, Teófilo, 2003, *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*, Bogotá, Cinep.

González, José, 1989, “Camino de oriente: aspectos de la colonización contemporánea del oriente colombiano”, en *Controversia*, número 151-152, Cinep, Bogotá.

-----, 1992. *Espacios de exclusión. El estigma de las repúblicas independientes 1955-1965*, Bogotá, Cinep.

-----, 2007, “Los paramilitares y el colapso estatal en Meta y Casanare”, en Romero, Mauricio, editor, *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris.

Habermas, Jürgen, 1986, *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Buenos Aires, Amorrortu Editores.

Kaldor, Mary, 2001, *Las nuevas guerras*, Barcelona, Tusquets Editores S.A.

Le Grand, Catherine, 1988, *Colonización y protesta campesina en Colombia: 1850-1950*, Bogotá, Centro Editorial Universidad Nacional.

Montenegro, Armando y Posada Carlos E., 2001, *La Violencia en Colombia*, Bogotá, Alfaomega y Cambio.

Münkler, Herfried, 2005, *Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia*, Madrid, Siglo XXI Editores.

Molano B., Alfredo, 1996, *Del Llano llano. Relatos y testimonios*, Bogotá, El Áncora Editores.

Peñate, Andrés, 1999, “El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado”, en *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá, Editorial Norma-Universidad de Los Andes.

Rubio, Mauricio, 1998, *Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, CEDE. Uniandes.

Santos, Milton, 1990, *Por una geografía nueva*, Madrid, Espasa Calpe.

Schmitt, Carl, 1972, *Legalidad y legitimidad*, Madrid, Editorial Aguilar.

Tilly, Charles, 1992. *Coerción, capital y los estados Europeos 990-1990*. Alianza Editorial S.A., Madrid.

-----, 2007, *Violencia colectiva*, Barcelona, Hacer Editorial.

Documentos e informes

Cerac, *Base de datos sobre conflicto*.

Cinep, *Archivo de prensa*, (2002-2008).

Entrevistas con habitantes de Arauca (diciembre de 2007; abril y mayo de 2008).

Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2007, *Diagnóstico departamental de Arauca*, disponible en <http://www.derechoshumanos.gov.co>